



Davos del agua en México

OSVALDO DURÁN

Del 16 al 22 de marzo de 2006 se realizó en México el IV Foro Mundial del Agua, evento que hemos definido como el *Davos del agua*: en el Foro Económico que se realiza anualmente en Davos los países más poderosos del planeta definen sus líneas de política económica para el control mundial, y en el Foro del Agua se reafirman las orientaciones para el control y explotación privada del agua a nivel mundial.

El tema de fondo del *Davos del agua* fue cómo incrementar el negocio privado del agua, aunque las instituciones financieras internacionales, las empresas privadas del agua y sus entidades civiles como el Consejo Mundial del Agua y Global Water Partnership (GWP), entre otras, hablaron de responder a los retos de financiamiento, acceso, distribución, papel de los gobiernos, etcétera, e incluso proclamaron -repetiendo exactamente el mismo discurso de todos los eventos anteriores, documentos y artículos de prensa- su oferta de favorecer el acceso al agua de la población más pobre del planeta, cuya exclusión se ha agudizado, precisamente, tras las privatizaciones de los servicios de agua, saneamiento y alcantarillados promovidos por ellas.

El Foro Mundial del Agua (FMA) es organizado por el Consejo Mundial del Agua (WWC), integrado por representantes del Banco Mundial, de las transnacionales del agua como Veolia y Suez y de las llamadas agencias de cooperación. “Actualmente -según Andrés Barreda y Tony Clarke (2006)-, el WWC está compuesto por 300 miembros de tan solo 50 países del mundo, entre los que destacan ejecutivos de empresas privadas como Bewater y Sequent Trent, consultores financieros de empresas como Prizer Water Cooper, así como de empresas constructoras, firmas financieras, departamentos gubernamentales y varias asociaciones de profesionales”.

Según estos analistas, el Foro “ha sido diseñado para demostrar lo que pueden hacer las grandes empresas y los gobiernos para promover ‘soluciones’ desde el sector privado”, y México fue seleccionado porque el presidente Fox está promoviendo su plan Promagua que facilitará “la apropiación privada y transnacional de los sistemas municipales de agua por empresas como Suez, Veolia y RWE-Thames, con ayuda de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial”.

El *Davos del agua* fue un foro de exclusión para todas las organizaciones sociales e instituciones que no coinciden con la política de promoción de la privatización del Banco Mundial, el Consejo Mundial del Agua y el Gobierno Federal de México, organizadores del encuentro. Estas entidades, como lo habíamos advertido mucho tiempo antes, controlaron toda la organización del evento, los temarios, las mesas de trabajo, los paneles, etcétera, para impedir las disidencias con sus tesis mercantilistas. Incluso dentro del foro, cuyo costo oficial de inscripción era \$600, algunas manifestaciones como la promovida por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de Canadá, para la defensa de 2.609 ríos del planeta, fueron amedrentadas y seguidas “muy de cerca” por los militares del Estado Mayor Presidencial de México, cuyo despliegue de seguridad sorprendió a todos los asistentes y fue señalado por la prensa local.

Precisamente por la exclusión de organizaciones sociales nacionales e internacionales defensoras del agua pública, fue que la Secretaría del Agua del Gobierno del Distrito Federal de México organizó un *foro del agua* paralelo, con el propósito de colocar la visión de defensa del agua como un tema relevante desde la óptica gubernamental. También, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua convocó y congregó organizaciones sociales de todo el planeta en el Foro Internacional en Defensa del Agua, que, en palabras de Maude Barlow (2006), una de las principales analistas y opositora de la privatización del agua en el mundo, fue “el verdadero espacio para defender el derecho a conservar el agua como bien común”. Barlow ya había reafirmado, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en enero de 2005, la urgencia de reforzar campañas mundiales contra las transnacionales del agua Suez, Veolina y Bechtel, y otras empresas como Coca Cola, Pepsi y Nestlé, que están multiplicando sin límite la explotación del agua como negocio privado, excluyendo a segmentos cada vez mayores de población pobre y fomentando modelos corruptos e ineficientes, como se ha demostrado en todo el planeta (ver Pnud 2003).

Para quienes defendieron el carácter público del agua desde los foros alternativos, el IV FMA fue el foro “convocado por las empresas transnacionales y los organismos financieros internacionales”, como lo sintetizó un representante de los opositores de la construcción de la represa La Parota en Guerrero -México- (35.000 desplazados). La revisión del *Davos del agua* y de los dos eventos alternativos paralelos podemos orientarla en

Oswaldo Durán Castro, sociólogo, es presidente de la Asociación Proyectos Alternativos para el Desarrollo Social (Proal), miembro de la Junta Directiva de Fecon y trabaja en Redes Iberoamericanas para la Defensa del Agua (osvaldod@proalcr.org).

alrededor de tres cuestiones cruciales sobre las que las sociedades debemos decidir: (1) agua pública o privada, (2) agua nacional o de las empresas transnacionales y (3) agua como derecho humano inalienable o mercancía para enriquecer a los comerciantes privados y reafirmar la exclusión de la gente más pobre. No se trata de simples diferencias de matiz o escala, sino de antagonismos de cuya resolución depende la vida de miles de millones de personas. La respuesta ante estos derroteros varía según el modelo de sociedad que defendamos y, en gran medida, del perfil de los gobiernos cuyo accionar puede acelerar o impedir la mercantilización de las reservas de elementos naturales. Esta contraposición es la que revisaremos a continuación.

Agua pública o privada

Que el agua sea pública no se restringe a que sea controlada por el estado, sino que pasa por el nivel de participación social que se pueda articular para su manejo solidario, justo y equitativo. No podemos reducir lo público a lo estatal, sobre todo en tiempos en que muchos estados han sido secuestrados (o usurpados ilegalmente como en Costa Rica) por elites de poder neoliberales cuya vocación desnacionalizadora y privatizadora pone en inminente riesgo a la sociedad y la naturaleza. La defensa del carácter público del agua no significa pedir que se regale a los consumidores, salvo casos extremos de pobreza, en los que el manejo público responsable del agua sirve para su distribución solidaria y no lucrativa. Con esto se asegura que todas las personas tengan acceso independientemente de su condición socioeconómica. Un servicio público eficiente garantiza que los costos reales del servicio sean cubiertos por los consumidores según las utilidades que se dan al agua. En todo el mundo, y Costa Rica no es la excepción, las concesiones a privados se dan con privilegios tarifarios que degeneran en subsidios de la gente más pobre para los más ricos. Esto es una forma de privatización-explotación del agua a favor de empresas locales y foráneas. Los enclaves hoteleros de Costa Rica, por ejemplo en Guanacaste, son un claro ejemplo de competencia desigual entre éstos y las comunidades empobrecidas y con cada vez más problemas para defender y asegurar su agua.

Lo que el *Davos del agua* y otras citas anteriores -en Johannesburgo, La Haya, Japón, etcétera- han demostrado es que las empresas transnacionales del agua y la banca privada mundial están creando escenarios propicios para apoderarse de todos los mercados de distribución de agua y sistemas de saneamiento y alcantarillados sin importar su tamaño, dado que en todos los casos resultan rentables, básicamente por dos razones: porque son indispensables para toda la población, por lo que toda la gente tratará de pagar, y porque los estados, cuyo tráfico de influencias y corrupción asociadas a la privatización ha sido ampliamente demostrado, facilitan la gestión de las empresas transnacionales -como en Bolivia, Argentina, Filipinas, Chile y Sudáfrica.

Sin rebotar el maniqueísmo del discurso privatizador que condena toda acción del estado, lo cierto es que en el caso del agua la privatización no registra casos exitosos. El Pnud, fuente de aceptación generalizada, en su *Informe de desarrollo humano* (2003) indica que la privatización, e incluso las sociedades público-privadas promovidas por GWP -entre otras entidades- para supuestamente mejorar la “governabilidad del agua”, agravaron la exclusión de la gente más pobre, subieron las tarifas de manera prohibitiva, no mejoraron los sistemas de saneamiento y demostraron ser ineficientes, irresponsables y corruptas.

Agua nacional o de las transnacionales

Aunque la comercialización privada de agua representa apenas entre el cinco y el seis por ciento de todas las ventas mundiales, ya significa enormes ganancias para algunas empresas. Se calcula que Suez y Vivendi, ambas francesas, controlan entre el 65 y el 70 por ciento del negocio. A ellas se une la alemana RWE-Thames como tercera, y un poco más pequeña es Bechtel, recordada por su guerra del agua contra el pueblo de Cochabamba - Bolivia. Estas cuatro empresas tienen cerca de 350 millones de clientes extendidos por todos los continentes gracias a las estrategias de apertura y atracción de inversiones externas que los gobiernos promueven.

Otro fastuoso negocio del agua privada y transnacionalizada es el agua embotellada. Se calcula que en los años setenta se vendía unos 2.000 millones de litros de agua embotellada, pero ya antes del año 2000 el negocio era de más de 84.000 millones de litros. Las cifras de las ventas son más reveladoras: se pasó de \$22.000 en 2000 a \$42.000 en 2003. Nestlé, Pepsi, Coca Cola y Danone son algunas de las marcas de mayor venta en el planeta. Igual de rentable para las transnacionales del agua han sido las privatizaciones facilitadas por los gobiernos y promovidas por agencias como el Banco Mundial, casualmente uno de los principales impulsores de los foros mundiales del agua (véase Shiva 2005).

El debate sobre la propiedad del agua se está desarrollando en medio de grandes resistencias sociales debido a la excepcional importancia de ella para la vida. Ante su privatización, las respuestas populares de oposición y resistencia han sido más rápidas, decididas y contundentes que ante cualesquiera otras privatizaciones. Un ejemplo claro del peso de la resistencia civil es la expulsión de Coca Cola de Kerala -India- en febrero de 2004. Esta lucha es particularmente emblemática porque fue iniciada por las mujeres adivasi, y gracias a su empeño fue reforzada por estudios que comprobaron la desmedida extracción y explotación comercial del agua (producir un litro de Coca

Cola implica el gasto de nueve litros de agua), los daños a los ecosistemas y sus efectos negativos en la salud de las personas. Vandana Shiva (Ibid.) nos recuerda que los prejuicios hacia la administración pública han contribuido a una privatización que, lejos de lo que se anuncia, impide proveer de agua de buena calidad y precio justo a la población más pobre. Este tema alcanza ahora mayor notoriedad en medio de las desprivatizaciones que se están imponiendo como una tendencia exitosa de movimientos sociales y gobiernos en Suramérica, y que encuentra en la insistencia neoliberal de privatización ya casi una contratendencia que sobrevive gracias a los gobiernos centroamericanos, incluido el de Costa Rica, que siguen promoviendo la privatización, la apertura y las concesiones como mecanismos de operación para eliminar la gestión pública responsable del estado.

Los ligámenes entre corporaciones y gobiernos y su peso en la definición de la geopolítica contra la naturaleza a escala global se expresan en las guerras y negocios en Medio Oriente en las últimas décadas. En diciembre de 1983, tres años después de que Sadam Hussein atacara Irán, Ronald Reagan y George Schultz enviaron a Iraq un emisario llamado Donald Rumsfeld para discutir cómo Estados Unidos podía ayudar a Irak en esta guerra. Según explica Ignacio Ramonet, director de *Le monde diplomatique*, el resultado más claro de la entrevista fue el acuerdo de construir un oleoducto a cargo de Bechtel, gigantesca empresa de la que George Schultz había sido presidente y director general hasta el momento de asumir su puesto en el gobierno de Reagan (volvió a la dirección de la empresa después de 1989). Ahora, de nuevo, después de la invasión de Irak, y siguiendo la lógica de los negocios y no las disputas políticas entre Estados Unidos e Iraq, Bechtel es una de las empresas más beneficiadas con contratos de “reconstrucción” hasta por \$1.800 millones. Esta misma empresa “que financia las campañas electorales de la familia Bush, proporcionó a Irak una fábrica química” (Ramonet 2005: 54). Bechtel fue la transnacional que provocó la guerra del agua en Cochabamba -Bolivia- y demandó por \$25.000.000 a ese país luego de que fue expulsada por incumplimiento de contrato y por convertir el agua en un lujo. También es, en Costa Rica, la concesionaria del manejo del aeropuerto Juan Santamaría y de la carretera Bernardo Soto, una de las operaciones de atracción de inversión externa directa. Los negocios del agua son una cartera más en la agenda de las grandes empresas transnacionales, con la finalidad de elevar sus ganancias, aun cuando los resultados sociales de sus operaciones sean “desastrosos”, como lo ha reconocido el Pnud.

La mancomunidad entre transnacionales del agua y gobiernos queda bien reflejada en Chile donde Endesa de España acaparó, gracias a los gobiernos anteriores, el 96 por ciento de todas las concesiones de agua en la región de Aysén -Patagonia. Ahora están buscando, en medio de una creciente resistencia social, construir represas en los ríos Pascua y Baker -el más caudaloso de Chile- para generar hasta 2.400 megavatios, que serían usados para más explotaciones mineras.

La mancomunidad entre transnacionales del agua y gobiernos queda bien reflejada en Chile donde Endesa de España acaparó, gracias a los gobiernos anteriores, el 96 por ciento de todas las concesiones de agua en la región de Aysén -Patagonia. Ahora están buscando, en medio de una creciente resistencia social, construir represas en los ríos Pascua y Baker -el más caudaloso de Chile- para generar hasta 2.400 megavatios, que serían usados para más explotaciones mineras.

Derecho humano inalienable o mercancía

Definir si el agua ha de ser pública o privada, y si nacional o de las transnacionales, obliga a resolver sobre el acceso irrestricto de todas las personas al agua de calidad y en cantidad adecuada, sobre su purificación y potabilización, sobre su utilización priorizada en consumo humano y domiciliario, sobre la seguridad alimentaria, sobre la clarificación de costos reales y precios justos para cada sociedad, sobre sistemas de saneamiento, etcétera. Todos estos aspectos son relevantes pero antes de resolver sobre cada uno ellos es indispensable prestar toda la atención a la protección de los ecosistemas que garantizan su ciclo vital, pues en cualquier caso una gestión social del agua puede resultar inútil si se descuidan los ecosistemas.

La declaratoria del agua como derecho humano inalienable está cobrando cada vez más importancia ante los fracasos de la privatización y de las concesiones de operación a empresas transnacionales. Las guerras del agua comenzaron hace décadas y ya contabilizan varios muertos. En la agenda social, pública y de derechos humanos del agua, y en los espacios regionales, nacionales, comunitarios y personales, lo que se está posicionando con fuerza es la defensa del agua como elemento vital para la vida y para impedir que termine de ser enrolada en los circuitos de acumulación de riqueza global. La amenaza es real: las grandes empresas transnacionales están invirtiendo dinero



Población de Cochrane (Chile) recibiendo información sobre las megarepresas que allí construirá Endesa. (Foto de Nicolás Durán)

en armas, guerras, sobornos y toda clase de presiones políticas para apoderarse del agua de América Latina y del mundo entero. Para ellas no somos países sino regiones geopolíticas: Puebla-Panamá, la región andina alta incluidas Colombia y Venezuela, la Amazonía, el acuífero Guaraní que cubre un territorio en cuatro países de 1.194.000 km² y acumula 55.000 km³ de agua, la Patagonia, etcétera. Un ejemplo claro de esto es que las líneas de tendido eléctrico para el tráfico de hidroelectricidad en América Central ahora proyectan traspasar el tapón de Darién para unir el Plan Puebla Panamá con el Plan Colombia. Éste es un proyecto concesionado a Endesa y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid).

El paso clave de arranque de la tendencia recuperadora de la dignidad social colectiva se dio con el plebiscito en Uruguay que incorporó reformas a la *Constitución* declarando el agua “esencial para la vida”, y el acceso a ella y los servicios de saneamiento como “derechos humanos fundamentales”. Además, el 60 por ciento del electorado que participó en la decisión estableció que los servicios de agua serán prestados exclusivamente por entidades estatales. La gesta del plebiscito se dio entre disputas con dos operadoras privadas de agua por sus reiterados incumplimientos: “Aguas de la costa pertenece a la española Aguas de Barcelona, que a su vez es filial de la francesa Suez-Loynnaise des Eaux. Desde que se instaló en Maldonado en 1992, las tarifas del servicio pasaron a ser siete veces más altas que en el resto del país”. Uruguay, la otra compañía expulsada de Uruguay, es propiedad de las firmas españolas Cartera Uno, Iberdrola y Aguas de Bilbao (según Raúl Pieri). Otros impulsos para la defensa del agua que estimularon los debates en los foros alternativos al *Davos del Agua* son la creación del Ministerio del Agua en Bolivia y el envío, por parte del gobierno de Evo Morales, de una carta a la Organización Mundial del Comercio (OMC) exigiendo que el agua sea excluida de cualquier negociación en acuerdos comerciales, como los tratados de libre comercio. También Uruguay, secundado por Bolivia y Venezuela, presentó documentos alternativos a la declaración ministerial que es la posición oficial negociada de previo por el Banco Mundial y los gobiernos que asistieron al Foro del Agua. No menos importantes fueron las manifestaciones sociales contra la privatización efectuadas durante todos los días de los eventos, también realizadas en medio de un despliegue inusitado de contingentes militares y vigilancia aérea constante.

Derecho humano vs. privatización

La creación de una memoria histórica para reivindicar el agua como un elemento bajo cuidado y propiedad de los países y para los pueblos se ha reafirmado también con la decisión del gobierno de Néstor Kirchner de expulsar a la transnacional Suez de Argentina. Ahora la empresa quiere demandar a este país por \$1.200 millones.

Los organizadores del *Davos del agua* repitieron el discurso sobre la crisis del agua y sobre las multimillonarias sumas necesarias para atenderla. La respuesta de las instituciones financieras internacionales es incrementar las inversiones de manera “sustancial” en cada país y de acuerdo con la *Declaración ministerial* esto será posible con créditos de la banca multilateral y las inversiones de empresas en sociedad con estados -Plan Puebla Panamá- y privadas. El Banco Mundial, ahora dedicado a promover la gestión del agua, considera que la inversión pública es esencial pero que será insuficiente y, por esa razón, es que el G8 ha definido una línea de financiamiento para el agua. Exactamente lo mismo propuso el presidente del Bid, Luis Alberto Moreno, al resaltar la necesidad de estimular la atracción de inversiones externas multi y bilaterales, iniciando con un pequeño fondo de \$1.500.000 con posibilidades de ampliación pronta (*La Jornada* 18-3-06: 42). También hubo propuestas técnicas para la purificación de agua, sistemas de saneamiento, acueductos, etcétera, pero ante esa propuesta de cooperación del Banco Mundial, el Bid, la Organización de Países para la Cooperación, etcétera, lo primero que habrá que asumir es que el agua de nuestros propios países servirá a los del G8 para nuevos ciclos de endeudamiento externo.

La conexión entre las instituciones financieras internacionales y el agua privada se aclara con el movimiento de sus tecnócratas. Michel Camdessus, expresidente del Fondo Monetario, fue designado desde su salida de esta entidad como una especie de “iluminado” del agua del G8. Su polémico Informe Camdessus, calificado por Vandana Shiva como “una receta para la privatización del agua”, procura orientar la privatización del agua bajo las reglas de la OMC, con el fin de asegurar a las instituciones financieras internacionales, controladas por el mismo G8, una nueva fuente de endeudamiento de los países del Sur. En México, hablando como vocero de los promotores de la privatización, Camdessus dijo que las inversiones requeridas solo para atender la demanda de agua en agricultura es de hasta \$40 millones por año (*La Jornada* 18-3-06: 42), dinero que sería en buena parte “aportado” por tales instituciones financieras.

La síntesis del *Davos del agua* es que tenemos muy poco o ningún avance en el mundo para resolver el acceso al agua de toda la población. La meta de este IV Foro Mundial del Agua de reducir en 2015 a la mitad la cantidad de gente sin agua no es nueva, sino que repite los objetivos fijados en el II Foro -La Haya 2000- y en el III Foro -Japón 2003. Esto significa que ni los acuerdos de los foros previos ni la *Declaración del milenio*, ni el *Plan de implementación* de Johannesburgo -de 2000-, han sido cumplidos. La discursiva *Declaración ministerial* incita a los gobiernos a implementar estrategias en “favor de los más pobres” para reducir la pobreza, pero no dice nada respecto de los fracasos de los procesos de privatización que ellos mismos promueven y que han agudizado y

complicado el acceso al agua para esa población. Por eso es que advertimos sobre un nuevo ciclo de endeudamiento externo con el agua como pretexto.

El saldo más notable de los foros alternativos es el perfil de una agenda mundial común para la defensa del agua. Esta orientación se basa en la necesidad de frenar la conversión del agua en una mercancía, con lo que ya empresas como Suez, Veolia (Vivendi), RWE-Thames, Bechtel, Pepsi Cola, Coca Cola, Nestlé (estas tres con agua embotellada) y muchas más están obteniendo “indecentes” ganancias en todo el planeta. Danielle Miterrand, una de las defensoras del agua más reconocidas en el mundo, ha dicho que “debemos impulsar acuerdos básicos que generen un discurso alternativo en el que se establezca que el agua no es una mercancía y no podemos comercializarla” (*La Jornada* 18-3-06: 44).

Los gobiernos de sello neoliberal siguen aplicando políticas de apertura comercial y estímulo de la inversión externa que incluyen el agua como atracción dada su rentabilidad inmediata. En muchos casos, además de promover la inversión, allanan el camino con aumentos previos a la privatización y durante su implementación. Según Elsa Bruzzone, estudiosa del proceso de privatización del agua, en Argentina el gobierno aumentó las tarifas holgadamente antes de privatizar (54 por ciento en 1991, 18 por ciento de *iva* en 1992 y 8 por ciento en 1993) y, solo ocho meses después de privatizada, Aguas Argentinas (nombre local de la francesa Suez) pidió una "revisión extraordinaria" de tarifas. Resultado: a lo largo de la concesión hubo un 54 por ciento de aumento y, considerando el deterioro salarial, el "incremento real de la tarifa media ha sido de 187 por ciento". Es por esto que podemos asegurar que los gobiernos no han promovido la privatización como una opción salvadora sino como parte de su plan de saqueo de las economías nacionales. No solo las transnacionales del agua han ganado sino también sus socios locales, y es por esto que las sociedades de privatización público-privadas resultan un mecanismo no solo de venta del agua sino también de corrupción, robos y estafas.

Referencias bibliográficas

Barreda, Andrés y Tony Clarke. “Foro del agua. ¿Quién está dentro y quién afuera?”, en *La Jornada* 18-3-06.

Le monde diplomatique. 2005. *El agua y el futuro del mundo*. Ed. Aún creemos en los sueños. Santiago.

Ramonet, Ignacio. 2005. *Irak. Historia de un desastre*. Debate. Argentina.

Shiva, Vandana. “Una batalla contra el robo y la contaminación. Coca Cola en Kerala”, en *Le monde diplomatique* 2005.

Pnud. 2003. *Informe sobre desarrollo humano 2003. Los objetivos de desarrollo del milenio: Un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza*. New York.

La Jornada 18-3-06.

Entrevistas

Maude Barlow. Marzo 2006. México.



Ometepec, Nicaragua

